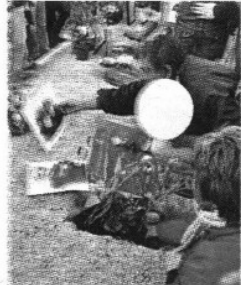


REPORTAJE

DOS AÑOS Y NADA

La masacre de docena y media de jóvenes en una fiesta en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cumplió esta semana dos años y la investigación sigue siendo un expediente abierto. (JR)



# A 2 años de Salvárcar continúa la violencia

□ La masacre, sin castigo; se han fabricado culpables

■ Violaciones generalizadas de los **derechos humanos**

■ Por temor, acuartelan en hoteles a la policía

José Reveles

La masacre de docena y media de jóvenes en una fiesta en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cumplió esta semana dos años y la investigación sigue siendo un expediente abierto que incluye la fabricación de culpables con tal de ofrecer resultados a los familiares.

Esa matanza colectiva parecía marcar el punto más alto de la inseguridad en la ciudad fronteriza, pero 24 meses después la situación ha llegado al extremo de que los policías municipales se atrincheran en hoteles y no pueden ir a sus casas.

Se trata de un acuartelamiento sui géneris, pues grupos de sicarios atacaron a policías que estaban concentrados en una comandancia y ahora fueron enviados a diversos hoteles para sortear el peligro. Van ocho policías victimados en dos semanas y el secretario de Seguridad Pública municipal, el teniente coronel Julián Leyzaola, decidió resguardarlos así:

“Se pretende evitar que sean víctimas de ataques en los recorridos del trabajo a la casa o viceversa. Esto nos permitirá conti-

nuar con los trabajos de **seguridad** pública que se han venido desarrollando con resultados favorables para la ciudadanía juarense”, dijo este militar que antes se encargó de la **seguridad** en Baja California.

En *narcomantas* aparecieron en días recientes amenazas de ejecutar a por lo menos a un policía cada día y acusando a Leyzaola de atacar solamente a integrantes del grupo de sicarios La Línea (del cártel de Juárez, hoy aliado con *Los Zetas*) y de proteger a la organización de Joaquín *El Chapo* Guzmán.

Independientemente del costo monetario de mantener hospedados en hoteles, con vigilancia día y noche, a los policías que tienen su domicilio allí mismo, en Juárez, como si fueran agentes federales enviados desde el centro del país, se expone al turismo a un ataque a instalaciones diseñadas para el descanso y no para la guerra contra la delincuencia, criticaron organizaciones civiles.

También recordaron que no se ha hecho justicia al procesado Israel Arzate Meléndez, detenido y torturado para convertirlo en “chivo expiatorio” de la matanza, según **irrefutables pruebas presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos** en las recomen-



daciones 49/2011 y 50/2011, ninguna de las cuales ha sido aceptada por las autoridades implicadas ni mucho menos han sido cumplidas, expresó la abogada Cecilia Guadalupe Espinosa, de la Red Mesa de **Mujeres** de Ciudad Juárez, AC.

En cambio, tal como se hizo gran publicidad en Tijuana, por el mismo motivo las autoridades se apresuraron a decir desde febrero de 2011 que las ejecuciones en Juárez habían caído drásticamente en un 69 por ciento, pues del récord

de 299 asesinatos en octubre de 2010 se había pasado a 92 cuatro meses después.

Todo ello apareció en un documento llamado *Todos somos Juárez*, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. (Por cierto, la masacre de Villas de Salvárcar generó un plan así llamado al que se han destinado más de tres mil millones de pesos, pero la propia policía está siendo masacrada por la delincuencia.)

Hay violaciones generalizadas de los **derechos humanos** en Juárez, pero ni militares ni policías están siendo investigados, según el informe de la organización Human Rights Watch hace dos meses, titulado *Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México*.

El caso Israel Arzate "ejemplifica el patrón de violaciones a los **derechos hu-**

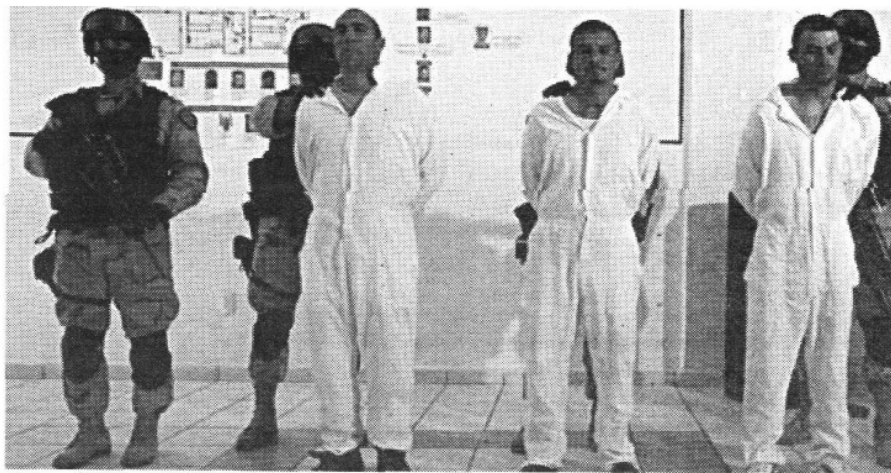
**manos** cometidas tanto por elementos de las Fuerzas Armadas como por las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia", aun tratándose de uno de los primeros **juicios orales**, y confirma que la participación de militares en tareas de investigación y persecución del delito "pone en riesgo la vigencia de los **derechos humanos**", expresó la Red de **Mujeres**.

### Abusos militares

Luz del Carmen Sosa, de *El Diario de Juárez*, reportó que las ciudades que más concentran denuncias contra militares por homicidios, desapariciones, violaciones sexuales y tortura son Chihuahua, Ojinaga, Ciudad Juárez y Buenaventura, según recuento de la **CNDH**.

Los abusos se multiplicaron en 2008 y 2009 en cuanto arrancó la Operación Conjunta Chihuahua, según análisis de las recomendaciones de la Comisión. En la mayor parte de los casos el Ministerio Público civil declinó la competencia al fuero castrense.

Al general Manuel de Jesús Moreno Aviña se le acusa de ordenar ejecuciones de civiles (al menos siete), de apropiarse de vehículos y dinero y recibir dádivas de traficantes mientras presidió la guarnición militar de Ojinaga. Con él son investigados una veintena de oficiales y elementos de tropa. Se ignora el resultado de las investigaciones.



Detenidos por las ejecuciones en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez. (Foto: Reuters)